



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA DE DECISIÓN LABORAL**

AUTO INTERLOCUTORIO 061

Aprobado mediante Acta del 17 de mayo de 2024

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	760013105015201900629-01
Demandante	José Fernando del Carmen Arango Villa
Demandado	Sistemas Expertos en Salud Latinoamericana SES SAS, Hospital Ortopédico SAS
Llamado en garantía	La equidad seguros generales organismo cooperativo
Tema	Medida Cautelar
Decisión	Confirma
Magistrado Ponente	Álvaro Muñoz Afanador

En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, el veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticuatro (2024), la Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados Álvaro Muñoz Afanador, quien actúa como ponente, Elsy Alcira Segura Díaz y Jorge Eduardo Ramírez Amaya; obrando de conformidad con la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se modificó el artículo 82 del CPTSS, adopta la decisión con el fin de resolver el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial del demandante contra el auto n.º 951 del 27 de marzo de 2023, proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, mediante el cual negó la medida cautelar.

1. ANTECEDENTES

Con la demanda se pretende que se declare que entre la demandada Sistemas Expertos en Salud Latinoamericana SES S.A.S., en adelante SES y el

actor, se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales como médico, realizando consultas externas y cirugías en el área de neurocirugía en esta ciudad, y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de \$24.016.738 por los servicios prestados, así como los intereses moratorios causados desde el 28 de mayo de 2019, hasta que se haga efectivo el pago de las sumas solicitadas, o en subsidio los intereses corrientes o la indexación, además de lo que resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso.

Una vez estudiada la demanda y luego de enmendadas las falencias, el Juez Quince Laboral del Circuito de Cali, la admitió mediante auto del 11 de febrero de 2021, en contra de la demandada mencionada, luego se vinculó al Hospital Ortopédico SAS, sociedad que llamó en garantía a La equidad seguros generales organismo cooperativo.

Con el escrito de demanda, la parte demandante presentó medida cautelar, solicitando la caución para garantizar las resultas del proceso, con fundamento en *«que los demandados no han pagado las sumas acordadas contractualmente»*, petición que amplió en audiencia celebrada el 27 de marzo de 2023, precisando que existe un indicio grave o posibilidades de que SES, no pagué al actor los honorarios adeudados, y además, porque según el certificado de Cámara de Comercio está en un proceso de liquidación, sino es que ya lo está, y además porque conforme a la contestación de demanda tienen problemas económicos e inclusive porque no compareció a esa diligencia. Añadió que esa entidad fue renuente al momento de contestar la demanda en diversos momentos. Afirmó que existe un proceso judicial por hurto en contra de los representantes de esa sociedad, por falta de pago de los profesionales de la salud, entre otros, por lo que solicita se preste la caución por el 50% de las pretensiones.

En la referida diligencia, el Juez de primer grado resolvió dicha solicitud de medidas cautelares, considerando que conforme al artículo 85A del CPTSS,

no existe prueba de que el demandado principal esta en las condiciones que señala la apoderada, explicando además que, al proceso se vincularon terceras personas que eventualmente podrían ser condenadas, concluyendo que no se acreditaron las condiciones especiales para la procedencia de la medida.

La anterior decisión produjo inconformidad de la apoderada judicial de la parte demandante, quien presentó recurso de apelación con fundamento en resumen en que, sí existen pruebas de que las serias dificultades para pagar los honorarios al actor, porque, conforme al certificado de existencia y representación legal de SES, se encuentra liquidada y disuelta, además porque en la misma contestación de demanda se señaló que no cuenta con capital, lo que se demuestra con el certificado de cámara de comercio que da cuenta del capital autorizado por diez millones de pesos y la demanda es por veinticuatro, sumado a que ese documento informa de varios embargos en contra de los establecimientos de comercio de esa sociedad, que demuestra la imposibilidad de hacer efectivo el pago ante una eventual condena.

Sumado a lo anterior, explicó que existen otros indicios, i) que la demanda se inició desde el año 2019, y que la entidad se notificó en varias oportunidades, sin embargo, a finales del año 2022 se hizo efectiva la contestación de la demanda; ii) no se hicieron parte en el proceso, y en la contestación del Hospital se indica de una denuncia por problemas de hurto y de pago con el personal, además que es un proceso que lleva más de tres años sin que se hayan efectuados los pagos correspondientes, iii) que no es un proceso ante la Superintendencia de Sociedades sino de liquidación ante la Cámara de Comercio, por ende, no hay como hacer efectiva la condena. Por último, preciso que aún no se puede determinar si las demás empresas vinculadas al proceso son responsables de manera solidaria con la demandada, por lo que solicita se decrete la medida.

2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Este despacho judicial, a través de auto, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión. Estando dentro de la oportunidad procesal, la parte demandante y la llamada en Garantía La Equidad Seguros Generales O.C. presentaron escrito de alegatos. Por su lado, las demás partes no presentaron los mismos, dentro del término concedido, tal como se observa en el expediente.

Es así, que se tienen atendidos los alegatos de conclusión presentados en esta instancia.

Se procede entonces a resolver, previas las siguientes

3. CONSIDERACIONES:

En cuanto al problema jurídico traído a conocimiento, la Sala considera importante mencionar que el debido proceso (arts. 29 CN y 14 CGP) es una garantía que obliga al juez a respetar las formas propias de cada juicio, en armonía con el principio de legalidad contemplado en el artículo 7° del CGP, y con observancia de las normas procesales, que son de orden público (art. 13 CGP).

El conocimiento de la sala se encuentra legitimado conforme al numeral 7° del art. 65 del CPTSS, debiéndose revisar la negativa de la medida cautelar que hiciere el juez de primer grado.

Para analizar el asunto se debe consultar el art. 85A del instrumental laboral, el cual establece que resulta procedente ordenar la medida cautelar en el proceso ordinario siempre que:

1. El demandado efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia.

2. Cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

En ambas hipótesis planteadas existe una discrecionalidad por parte del juzgador para estimar o considerar las situaciones fácticas que podrían dar lugar a materializar la medida de cautela en un proceso ordinario; resulta claro que este tipo de procesos presupone una contienda que parte de la incertidumbre, a diferencia de un proceso compulsorio donde se tiene una obligación clara, expresa y exigible, en el ordinario se llevará a cabo un debate probatorio encaminado a que sea el juez quien defina el conflicto y determine si existe o no, obligaciones a favor de la parte encartada, tal situación hace que las medidas cautelares sean la excepción y no la regla general.

En razón de lo expuesto, se debe acudir al material probatorio que citó la recurrente y que obra en el plenario, a efectos de determinar si realmente existen circunstancias que puedan llevar a inferir que existen actos tendientes a la insolvencia o graves y serias dificultades para el cumplimiento de la eventual obligación.

De los elementos materiales probatorios que obran en el proceso, se observa el certificado de existencia y representación legal de SES expedido por la Cámara de Comercio de Cali, allegado con la demanda en el año 2019, del cual no se advierte que la sociedad se encuentre en estado de liquidación ni disuelta como lo asegura la recurrente, información que tampoco se registra en el referido documento actualizado, dado que, se consultó por parte de esta corporación en la página del RUES¹, y se lee que cuenta la siguiente información: «*La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida*», de ahí que se quede sin sustento este argumento.

¹ Disponible en <https://www.rues.org.co/>

Ahora, no se demostró por la parte interesada que la sociedad haya modificado el monto del capital autorizado a diez millones de pesos, dado que, al revisar el certificado de existencia y representación legal por ella aportado, allí se registra tal monto, mismo que continúa vigente -según consulta del RUES-, por ende, esa situación no configura los presupuestos que consagra la norma para la procedencia de la medida.

Igual tesis se predica de lo relativo a los embargos con que cuenta el establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad, en principio, porque algunos fueron registrados, incluso, con antelación a que se radicara el presente proceso, y además porque tal circunstancia deviene de un tercero, sin que, de ello se puede establecer graves dificultades económicas para el cumplimiento de una eventual condena, en todo caso, valga recordar que de proceder la condena, debe tenerse en cuenta la prelación de los créditos laborales conforme al art. 345 del CST, y el art. 2495 del Código Civil.

Además, el hecho de que esa sociedad no hubiese presentado la contestación de la demanda sino hasta el año 2022, no es un indicio de su renuencia a comparecer al proceso como lo asegura la abogada, sino que, por el contrario, da cuenta de que con antelación no se había efectuado la notificación en debida forma, pues de ser así, se hubiese tenido por extemporánea la contestación, lo que no ocurrió, y en todo caso, la comparecencia oportuna o no al proceso por la demandada, tampoco configuran los presupuestos de la norma.

Por último, de la contestación de la demanda se señala que, los incumplimientos en los pagos se deben a controversias en el cobro de una póliza suscrita entre SES y la llamada en garantía, en favor del Hospital demandado, para cubrir las obligaciones del contrato que suscribieron las demandadas, y que comprende las acreencias que reclama el actor, por ende, no se puede tener como cierto lo indicado por la abogada recurrente, respecto de la falta de capital, y en gracia de discusión, en manera alguna se avizora

que la demandada esté buscando insolventarse, o esté adelantando acciones tendientes a su disolución y liquidación o esté en grave situación financiera, que conlleve a pensar el incumplimiento de sus obligaciones. Valga precisar que las denuncias penales por presuntos delitos son situaciones ajenas al trámite de este proceso.

Así las cosas, a juicio de esta Sala, resulta insuficiente el esfuerzo probatorio asumido por la apoderada recurrente para demostrar los supuestos fácticos contenidos en la norma para imponer la medida cautelar en proceso ordinario laboral.

Es importante referir que las exigencias probatorias no resultan exageradas, sino que resultan de la adecuada intelección de lo pretendido por el legislador al establecer las medidas cautelares excepcionales para el proceso ordinario, pues permitir libremente la aplicación de estas medida sería atentar con el principio de la buena fe, debido proceso y derecho de defensa que pesa sobre todo tipo de actuaciones judiciales o administrativas, así lo expresó la Corte Constitucional al momento de estudiar la exequibilidad de la disposición mediante sentencia CC- C-379 de 2004, que a la letra indica:

(...) aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, ... los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio. Existe pues una tensión entre la necesidad de que existan mecanismos cautelares, que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de que esos mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida en que se imponen preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el proceso. Precisamente por esa tensión es que, (...) la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medidas cautelar, con lo cual, la ley busca que esos

instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, como el español, la ley establece tres exigencias (...)

Por lo expuesto se confirmará el auto apelado en todas sus partes y se condenará en costas a la parte recurrente, en esta instancia, en cuantía de \$100.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Tercera de Decisión Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto n.º 951 del 27 de marzo de 2023 proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali.

SEGUNDO. COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente, inclúyase, como agencias en derecho, la suma de \$100.000.

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y se suscribe en constancia por quien en ella intervinieron, con firma escaneada, por salubridad pública conforme lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ÁLVARO MUÑOZ AFANADOR

Magistrado Ponente

ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ

Magistrada



JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA

Magistrado